

Mediante una proposición no de ley en el Congreso

El GPP exige al Gobierno una auditoría de la cifra de fallecidos por la pandemia COVID-19 en España

- El Grupo Popular pide que el informe se realice por provincias, y con datos semanales desde el 1 de marzo
- El incremento de fallecidos respecto a las cifras habituales en marzo ha sido especialmente acusado en Castilla-La Mancha y Castilla y León, en porcentajes muy superiores, incluso, a los de Madrid.
- Contar con datos fiables y de calidad contrastada no es solo una ineludible exigencia democrática, es también un requisito imprescindible para el buen diseño de una eficaz estrategia de salida del confinamiento

7 de abril de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha exigido hoy al Gobierno, mediante una proposición no de ley, que audite la cifra de fallecidos por coronavirus en España, con datos por provincias, semanales, y desglosados por rango de edad, desde el pasado 1 de marzo, porque tener datos fiables es un requisito de calidad democrática.

El GPP reclama que dichos datos se publiquen clasificados de acuerdo con las siguientes categorías: (1) cifra total de fallecimientos en la provincia, incluyendo todos los datos procedentes del Registro Civil y de las licencias de enterramiento; (2) cifra esperada de fallecimientos en la provincia según la estadística MoMo (el sistema de monitorización de los excesos de la mortalidad diaria por todas sus causas); (3) cifra de fallecidos por la enfermedad COVID-19 y registrados como tales en la contabilidad que realiza el Ministerio de Sanidad, y (4) cifra de fallecidos con síntomas compatibles con la COVID-19 pero que no se han podido contabilizar como víctimas de la enfermedad.

Como recuerda el Grupo Popular, según la Organización Mundial de la Salud, solo se pueden contabilizar como positivos aquellos casos de enfermedad por coronavirus (COVID-19) respaldados por una confirmación de laboratorio. Pero, en España, el Gobierno de Sánchez aún no ha sido capaz de proporcionar las herramientas necesarias para que se lleven a cabo los tests en todos los casos requeridos. Como consecuencia, muchas defunciones causadas por el virus del SARS-CoV-2 no se están contabilizando correctamente.

Por ello, el GPP considera extremadamente probable que el número de fallecidos que se recogen en las actualizaciones publicadas por el Ministerio de Sanidad no coincida con el número real de muertos causado por la COVID-19. Algo que ha podido constatar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha al cotejar los datos del registro civil y de las licencias de enterramiento en esa comunidad autónoma con las cifras oficiales de fallecidos por la pandemia, y al comparar ambos con los datos de decesos de años anteriores.

El incremento de fallecidos respecto a las cifras que eran habituales en el mes de marzo ha sido especialmente acusado en determinadas provincias de Castilla-La Mancha y Castilla y León, en porcentajes muy superiores, incluso, a los de la Comunidad de Madrid. Este asunto, que queda acreditado en la estadística MoMo, ha acaparado el interés de los medios locales y ha acentuado la preocupación de los ciudadanos por la fiabilidad de los datos ofrecidos por el Gobierno.

Para el GPP, minimizar los datos de víctimas mortales de la enfermedad, quizá con el propósito de amortiguar el desasosiego ciudadano, dificulta la imprescindible tarea de elaborar una eficaz estrategia de salida del confinamiento. Además, no solo genera incertidumbre y malestar entre los españoles, sino que mina la confianza en el Gobierno de la nación. El temor ciudadano a que esta discrepancia no sea solo un error sino una muestra más de la mendacidad de un Gobierno incapaz de prever la gravedad de la pandemia -e incapaz también de atajarla eficazmente- socava la confianza en la propia democracia y en sus instituciones.

El Grupo Popular considera que la verdad debe ser la primera medida higiénica contra el coronavirus. Contar con datos fiables y de calidad contrastada no es solo una ineludible exigencia democrática, es también un requisito imprescindible para el diseño de una eficaz estrategia de salida del confinamiento.

Esta proposición no de ley ha sido firmada por la portavoz del GPP, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada por Barcelona, la vicesecretaria Social del PP, Cuca Gamarra, diputada por La Rioja, los portavoces adjuntos del GPP, Pilar Marcos, José Ignacio Echániz y Sandra Moneo, diputados por Madrid, Guadalajara y Burgos, respectivamente, y por los diputados del PP por Albacete, Carmen Navarro, por Soria, Tomás Cabezón, por Ciudad Real, Rosa Romero, por Segovia, Jesús Postigo, por Toledo, Carmen Riobos, por Ávila, Alicia García, y por Zaragoza, Pedro Navarro.